



Huelga global y sus explicaciones

Todos los niveles educativos estaban llamados ayer a una huelga, que, por primera vez, era global para todo el sector. Los recortes impuestos por las autonomías han motivado esta inusual coincidencia que ha dejado a su paso la acostumbrada guerra de cifras. El 80 por ciento de seguimiento, según los datos ofrecidos por los sindicatos convocantes, se queda en un 20 por ciento en la valoración del Ministerio de Educación. Para el departamento que encabeza José Ignacio Wert, la convocatoria de huelga fue secundada de forma desigual en las diferentes comunidades autónomas, con un seguimiento en su opinión inapreciable en Canarias, Galicia o La Rioja y más notable en Aragón, Asturias o Navarra.

Las concurridas manifestaciones que se multiplicaron por la tarde se saldaban con parecidas valoraciones, según correspondiera a una u otra

parte. Más allá de esa clásica guerra de cifras, que de tan dispares se hacen más difícilmente creíbles en ninguna de sus versiones, la cuestión de fondo reside en las razones que han motivado esta huelga. Desde que arrancó el último curso académico no ha dejado de resonar el eco del malestar, fundamentalmente de los docentes, por los efectos de la austeridad sobre el campo de la educación. La ampliación de horas lectivas y la drástica reducción en la contratación de interinos ha sido el efecto más visible en primera instancia y ha conllevado la reacción de la comunidad educativa.

Los ajustes derivados de la última vuelta de tuerca al déficit público, plasmada en los planes de ajustes de las diferentes autonomías, incide también en esta parcela tan sensible del gasto público. La sanidad y la educación ocupan más de tres cuartas partes del gasto de las comunidades

autónomas, por lo que ni una ni otra se han podido quedar fuera de las reformas. Por muy imprescindibles o justificadas que sean las medidas adoptadas por los ejecutivos regionales, la reacción de ayer goza de toda la legitimidad. El rechazo a las subidas de tasas en la universidad o de la ratio de alumnos por aula es una actitud lógica, porque, como otras medidas adoptadas por imperativo de los objetivos de déficit, no ha sido bien explicada.

Una parte de la sociedad, más reducida o más representativa, según a quien corresponda el juicio, no está entendiendo que la austeridad que dirige toda la acción de gobierno alcance al sector que pone las bases del futuro. Desde el gobierno central y los ejecutivos autonómicos se deberían poner empeño en explicar cambios que en algún caso constituyen un retroceso social.